**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D. C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Referencia 11001 40 03 057 2021 00174 00 Acción de Tutela

Cumplido el trámite de rigor procede el Despacho a proferir el fallo que corresponda dentro de la acción constitucional propuesta por el señor ANDREY SEBASTIAN PARRA FERNANDEZ contra BBVA COLOMBIA S.A. manifestando vulneración al derecho fundamental de petición

ANTECEDENTE

1. El señor Andrey Sebastián Parra Fernández radicó derecho de petición el 8 de noviembre de 2020 al correo electrónico de la entidad financiera encartada con ánimo que se eliminaran los reportes registrados ante las centrales de riesgo Datacredito y Cifin, el cual no ha sido contestado a la fecha de la presentación de esta acción.

2. Pretende a través de esta queja el amparo de la prerrogativa invocada, y se ordene al Banco BBVA que dé respuesta efectiva al derecho de petición de fecha 8 de noviembre de la anualidad anterior, y se reconozca a su favor el silencio administrativo.

3. Revisado el escrito de tutela, el Despacho admitió la causa el 26 de febrero hogaño ordenando la notificar a la accionada para que ejerciera su derecho de defensa, y se procedió a vincular a DATA CREDITO EXPERIAN y TRANSUNION CIFIN.

4. BBVA COLOMBIA S.A., manifestó que en oportunidad dio respuesta a la petición elevada por el quejoso, razón por la cual solicito que sean negada las preatenciones incoadas en el escrito de tutela.

5. CIFIN S.A.S. - TransUnion indicó, que solamente ostenta la calidad de operador de bases de datos, por ende, desconoce el contenido y las condiciones de los contratos entre los titulares y las fuentes de información, razón por la cual advierte que cualquier controversia suscitada debe ser atendida por el banco accionado, puesto que esa entidad no es la responsable por los datos reportados (Ley 1266 de 2008). Agregando que en atención a la información registrada en su base de datos se observó que *“...la entidad BANCO BBVA no tiene reporte negativo...”*.

6. EXPERIAN COLOMBIA S.A. adujo que no está llamada a mediar en las diferencias contractuales que pueda haber entre el titular de la información y la entidad cuestionada, pues las mismas deben ser expuestas en oportunidad por las partes, sin que le sea atribuible a dicha entidad responsabilidad alguna que no atañe a su deber de administrador de la información. De igual forma precisó que al revisar el histórico crediticio del actor, al 1 de marzo del año que avanza, *“...el accionante NO REGISTRA información negativa respecto de las obligaciones adquiridas con el BANCO BBVA...”*.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela constituye un mecanismo previsto en la Constitución Política de 1991 cuyo fin primordial es la protección de los derechos fundamentales en caso de amenaza o violación por las autoridades públicas o los particulares, viabilizados cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable (art. 86 C.P. y Decreto 2591 de 1991).

En cuanto a las condiciones de procedencia del amparo constitucional, se tiene que está supeditada al carácter de residualidad, subsidiariedad, e inmediatez, es decir, que no exista otra vía por medio de la cual se pueda obtener de modo óptimo y eficaz la protección aludida (salvo que se invoque como mecanismo transitorio), y que sea interpuesta de forma tempestiva y/o dentro de un término razonable a la ocurrencia de los hechos motivos de la queja.

2. En el sub-examine, se impetró la protección al derecho fundamental de petición del señor Andrey Sebastián Parra Fernández por cuanto, según se dijo, el Banco de BBVA Colombia S.A., se ha negado a dar respuesta al derecho de petición incoado el 8 de noviembre de 2020.

3. Para desatar tal cuestionamiento, considera el Despacho necesario adelantar el estudio del alcance del núcleo esencial del derecho de petición, como una prerrogativa fundamental expresamente consagrada en el artículo 23 de la Carta Política de Colombia. Cabe advertir, que dicho precepto normativo, surge como un mecanismo para obtener una respuesta por parte de una autoridad pública o privada, cuya decisión debe ser de fondo, clara y precisa. Los pronunciamientos tardíos y ambiguos no constituyen una contestación efectiva, ya que lesionan el núcleo esencial de dicho derecho, puesto que no se obtiene una solución a lo petitionado.¹

La Jurisprudencia Constitucional ha identificado, que el núcleo esencial del derecho de petición incluye: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos solicitudes ante las autoridades públicas y los particulares; b) el destinatario tiene la obligación de tramitar y resolver las peticiones incoadas dentro de los términos señalados por la Ley; c) la resolución debe ser clara, precisa y consecuente con las peticiones elevadas, no es admisible las respuestas evasivas; d) el contenido de la respuesta puede ser favorable o desfavorable a lo pedido; y e) se debe notificar la contestación dada, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso.²

Ahora bien, frente a los términos para resolver los derechos de petición, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 prevé que las peticiones de orden general deberán resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Exceptuando las peticiones de documentos y de información que deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Términos que fueron modificados dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica desatada por la pandemia del coronavirus del Covid – 19. El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, señala que todas las peticiones que se presente durante tiempo que dure la emergencia deberán resolverse dentro de los (30) días siguientes a su recepción. Las que sólo se traten de peticiones de documentos y de información se resolverán dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

De igual forma, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha precisado que los elementos estructurales del derecho de petición, se limitan a establecer que: (i) toda persona natural y/o jurídica podrá presentar peticiones respetuosas de interés general o particular, (ii) la solicitud podrá realizarse de forma verbal o escrita, y (iii) no se requiere invocar una técnica específica para incoarlo.³

1 Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas

3 "...Elementos que conforman el derecho fundamental de petición (...) Esta Corporación se ha pronunciado sobre los elementos estructurales que componen el derecho de petición. Particularmente, en la sentencia C-818 de 2011, reiterada por la C-951 de 2014, se refirió a los siguientes elementos: (...) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general (...) Tanto las personas naturales como las jurídicas son titulares del derecho fundamental de petición (...) La petición puede ser verbal o escrita (...) La Corte ha

Igualmente, la jurisprudencia constitucional en sentencia T-470 de 2019, señaló:

“...El derecho fundamental de petición supone la prerrogativa a obtener una resolución pronta, completa y de fondo. La resolución de fondo supone una resolución suficiente, efectiva y congruente con lo pedido. La Corte Constitucional ha explicado que:

i) una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; (ii) es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y (iii) es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.

De ahí que esa garantía imponga a las autoridades la obligación de adelantar un proceso analítico, dentro del cual: i) se identifique la solicitud, ii) se verifiquen los hechos, iii) se exponga el marco jurídico que regula el tema, iv) se usen los medios al alcance que sean necesarios para resolver de fondo, v) se pronuncie sobre cada uno de los aspectos pedido y vi) se exponga una argumentación con la que el peticionario pueda comprender completamente el sentido de la respuesta emitida. Así, no basta un pronunciamiento sobre el objeto de la petición cuando en él “no se decide directamente sobre el tema objeto de su inquietud, sea en interés público o privado, dejando [a la persona] en el mismo estado de desorientación inicial...”

4. En el caso concreto, el accionante Andrey Sebastián Parra Fernández remitió por vía electrónica derecho de petición direccionado a BBVA Colombia S.A., solicitando *“...la actualización de la base de datos y solicite a DATACREDITO EXPERIAN Y TRANSUNION CIFIN el retiro inmediato y se le dé cumplimiento a la ley HABEAS DATA 1266 en donde se refiere que ANTES DE REPORTAR a una persona ante las centrales de riesgo debe ser INFORMADO O NOTIFICADO antes de aparecer en estas entidades como moroso haciéndolo relativamente publico dañando así el buen nombre de las personas sin previo aviso y así se le dé cumplimiento a esta ley...”*.

A su turno, BBVA Colombia S.A., en virtud de la queja constitucional incoada en su contra, procedió a responder el derecho de petición referido en líneas precedentes, señalado que:

“..Una vez realizadas las respectivas validaciones, evidenciamos que el reporte negativo corresponde al histórico de retraso en los pagos registrados en los últimos 36 meses para la tarjeta de Crédito terminada con contrato No. 8644, en estado vigente, donde validados los movimientos registra mora recurrente en las fechas establecidas de pago.

En virtud de lo detallado anteriormente, nos permitimos comunicarle que no podemos atender de manera favorable su solicitud puesto que el reporte

señalado que el artículo 23 de la Norma Superior no hace ninguna diferenciación entre las peticiones presentadas de forma verbal y las escritas, en esa medida los dos tipos de solicitudes se encuentran amparadas por el derecho fundamental de petición (...) Las peticiones deben ser formuladas de manera respetuosa (...) Este Tribunal ha establecido que las solicitudes solo tienen el amparo constitucional cuando son presentadas en términos respetuosos. Particularmente la sentencia T-353 de 2000, resaltó el deber de respeto a la autoridad ante la cual se presenta la petición, pues de lo contrario la obligación de responder no nace a la vida jurídica. En este sentido, de forma excepcional es posible rechazar una solicitud que se considere irrespetuosa, sin embargo, esta interpretación es restrictiva, en consideración a que no toda petición puede tacharse de esa manera para sustraerse de la obligación de dar una respuesta de fondo (...) La informalidad de la petición (...) La Corte ha insistido en diferentes oportunidades que el derecho de petición se ejerce a pesar de que las personas no lo digan de forma expresa. En este sentido, si una autoridad exige que se diga específicamente que se presenta una solicitud de petición en ejercicio de este derecho, impone al ciudadano una carga que no se encuentra prevista en la ley ni en la Constitución Política...”. Sentencia 238 de 2018.

financiero fue asignado de acuerdo al histórico de pago registrado en dicha obligación.

Previo estudio del tema encontramos que el aviso del reporte es emitido en los extractos de la obligación, por lo tanto, la comunicación previa al primer reporte negativo fue enviado para la tarjeta de Crédito antes mencionada a la dirección de correo electrónico Andreysebastianparrafernandez@gmail.com, autorizada por usted al momento de actualizar nuestras bases de datos con la siguiente información:

“En Cumplimiento de lo dispuesto en la ley Habeas Data 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas, y fechas de exigibilidad, podrán ser reportados a la Centrales De Información Financiera. Sí aparecen cuotas vencidas, pasado veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales De Información Financiera por el término legal”.

(...) Conviene precisar que, la permanencia de la información y el dato negativo es administrado por las respectivas Centrales de Riesgo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, de Hábeas Data, Artículos 13 y 21.

Para finalizar, según su solicitud anexamos los soportes correspondientes como el formulario de vinculación donde se refleja la autorización otorgada para consultar, publicar, pagaré y extractos donde se refleja el aviso previo...”.

Respuesta que fue remitidas el 8 de marzo de 2021 a la dirección electrónico registrado en la base de datos de la entidad financiera cuestionada (andreysebastianparrafernandez@gmail.com), y señalada en el formulado de vinculación y contratación allegado junto con el escrito de contestación⁴. La cual se comunicó con posterioridad al lapso de tiempo que tiene la encartada para dar contestación al petitorio, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1755 de 2015,⁵ y en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 dictado por el Gobierno Nacional dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica,⁶ aunado a la naturaleza el requerimiento, corresponde a los treinta (30) días siguientes a la recepción del competente, es decir, que al momento de la interposición de esta tutela, que fue el día 26 de febrero de 2021 (ver Acta Individual de Reparto), ya se había vencido el lapso para dar respuesta, el cual acaeció el 22 de diciembre de 2020.

Con independencia a lo anterior, se advierte que pese a que dicha respuesta fue emitida con posterioridad al termino legal establecido por el legislador, lo cierto es que aquella se brindó y fue comunicado al actor, donde se precisó las razones por las se efectuó el reporte negativo, se indicó los canales mediante los cuales se requirió el pago adeudo, y se comunicó que se realizaría el reporte ante las centrales de riesgo, y se adjuntó la documental que en tal sentido dijo la entidad cuestiona tener en su poder.

En torno a lo anterior, y atendiendo la jurisprudencia en cita, es menester iterar que la respuesta a un derecho de petición se estima efectiva y suficiente

Correo electrónico	Dirección residencia		
ANDRESSEBASTIANPARRAFERNANDEZ@GMAIL.COM	CRA 6 ESTE # 100 B-44		
Número de personas a cargo	Antigüedad en la ciudad	Tipo de vivienda y relación con el domicilio	
4	03	2006-01-01	Propia sin hipoteca Propia con hipoteca Fa

⁵ “...Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente...”.

⁶ Estado de Emergencia prorrogado hasta el día 31 de mayo de 2021, de acuerdo a la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159366>

cuando aquella soluciona de forma material el caso que se plantea, con independencia a que sea negativa o positivamente, y congruente cuando exista coherencia entre lo peticionado y lo resuelto. De tal manera que la solución a lo requerido debe versar sobre la pregunta en concreto y no sobre otro tema. El pronunciamiento del receptor debe ser claro y preciso, donde se destaque los aciertos o desaciertos de lo peticionado.

Por lo tanto, si hubo vulneración o amenaza al derecho incoado, este cesó al momento de contestarse el requerimiento presentado por el actor, en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, pues la aludida pretensión se encuentra satisfecha y los derechos a salvo.⁷

En ese orden se ideas, se advierte que por sustracción de materia resulta improcedente pronunciarse sobre el silencio administrativo peticionado, y sin mayor consideración, se impone negar la protección deprecada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por el señor ANDREY SEBASTIAN PARRA FERNANDEZ, por las consideraciones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: COMUNICAR a las partes la presente, y las entidades vinculadas la decisión por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**3882afdac491bc1fd19e0cb4f8b2547c69113445b8c80ef7e55bdc7560e9c4
7a**

Documento generado en 11/03/2021 06:45:09 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**